

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 12 DE DICIEMBRE DE 2006.

Ley publicada en el Periódico Oficial el viernes 4 de noviembre de 2003.

LEY DEL INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EL C. ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;

DECRETA:

NÚMERO 97.-

LEY DEL INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TÍTULO PRIMERO

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

CAPÍTULO PRIMERO

BASES GENERALES

ARTÍCULO 1°. EL ÁMBITO DE VALIDEZ DE LA LEY. Esta ley es de orden público y de observancia obligatoria en todo el régimen interior del estado, en materia de organización y funcionamiento del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

Para los efectos de esta ley, este órgano se identificará como el Instituto.

ARTÍCULO 2°. LAS CARACTERÍSTICAS DEL INSTITUTO. El Instituto es un organismo público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en los términos de la Constitución Política del Estado y esta ley.

ARTÍCULO 3°. EL OBJETO DEL INSTITUTO. El Instituto tendrá por objeto:

- I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento de las convicciones humanistas, sociales y democráticas del estado constitucional de derecho.
- II. Promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del derecho a la información pública.
- III. Establecer las garantías necesarias para la protección del derecho a la intimidad de las personas.
- IV. Establecer la rectoría del sistema de administración, conservación y preservación de la documentación pública.

- V. Llevar a cabo la cultura de la transparencia informativa.
- VI. Promover la participación comunitaria y ciudadana en la materia.
- VII. Instrumentar el sistema de estadística, encuestas y sondeos.

ARTÍCULO 4°. LA FUNCIÓN DEL INSTITUTO. El Instituto, dentro del régimen interior del estado, se encargará de la rectoría de las materias a que se refiere el artículo 7° de la Constitución Política del Estado y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO SEGUNDO

EL INSTITUTO COMO ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO

ARTÍCULO 5°. EL INSTITUTO COMO ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO. El Instituto, dentro del régimen interior del estado, es un organismo público autónomo, en los términos que establece la Constitución, esta ley y las demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 6°. LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL. La autonomía constitucional del Instituto se basa en los principios de esencialidad, permanencia, independencia, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, responsabilidad y sujeción al estado humanista, social y democrático de derecho.

ARTÍCULO 7°. LA NATURALEZA DE LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL. La autonomía del Instituto se expresa en la facultad de resolver con libertad los asuntos de su competencia, sin interferencia de otros poderes u otros organismos públicos autónomos, salvo los medios de control que establezca la Constitución Política del Estado, esta ley y las demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 8°. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL. Para el desarrollo de sus funciones, el Instituto contará con autonomía política, jurídica, administrativa, financiera y presupuestal, en los términos que establece la Constitución, esta ley y las demás disposiciones aplicables.

SECCIÓN PRIMERA

LA AUTONOMÍA POLÍTICA

ARTÍCULO 9°. LA AUTONOMÍA POLÍTICA. El Instituto es un organismo político autónomo frente a cualquier órgano de los gobiernos federal, estatal y municipal.

La competencia del Instituto se ejercerá por sus órganos, conforme a esta ley y su reglamentación propia. En ningún caso, la autonomía podrá ser vulnerada o restringida por los gobiernos federal, estatal o municipal.

ARTÍCULO 10. EL INSTITUTO COMO DEPOSITARIO DE LA FUNCIÓN DE LA MATERIA. El Instituto es el depositario de la autoridad en la materia dentro del régimen interior del estado, responsable del libre acceso a la información pública, la protección del derecho a la intimidad de las personas, la documentación pública, así como del sistema de estadística, encuestas y sondeos, en los términos de las disposiciones legales.

El Instituto como autoridad, también se encargará de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública.

ARTÍCULO 11. LA GARANTÍA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y EL PRINCIPIO DE FIDELIDAD. El Instituto, en la esfera de su competencia, mantendrá con los gobiernos federal, estatal y municipal y con los demás organismos públicos autónomos, una relación de respeto y de colaboración mutua para el desarrollo democrático de la entidad.

Para el desempeño de sus funciones, el Instituto contará con el apoyo, el auxilio y la colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales y de los organismos públicos autónomos, bajo los principios de fidelidad federal, estatal y municipal, conforme a la Constitución Política del Estado y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 12. LA LEGITIMIDAD DE LAS CONTROVERSIAS Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD LOCALES. El Instituto podrá promover controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad locales, en los términos que establece la Constitución y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 13. LA FACULTAD DE PRESENTAR INICIATIVAS EN LA MATERIA. El Instituto, a través del Consejo General, podrá presentar iniciativas de leyes o decretos al Congreso del Estado en materia de acceso a la información pública; de protección del derecho a la intimidad de las personas; y de administración, conservación y preservación de la documentación pública.

Igualmente, podrá presentar anteproyectos de normas generales o particulares ante entidades públicas obligadas a proporcionar la información pública, para que éstas regulen la materia, en el ámbito de su competencia, según las bases legales y reglamentarias que expida el Instituto conforme a esta ley.

La facultad de las entidades públicas de reglamentar en su ámbito de competencia la materia que corresponda conforme a la ley, no limita ni restringe la facultad reglamentaria del Instituto que vinculará a dichas entidades.

SECCIÓN SEGUNDA

LA AUTONOMÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 14. LA AUTONOMÍA JURÍDICA. El Instituto, a través del Consejo General, tiene la facultad de expedir reglamentos, acuerdos, circulares, políticas o cualquier otra disposición general o particular que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y el ejercicio de los derechos en la materia.

Los reglamentos y demás normas de carácter general o particular, serán de observancia obligatoria para las entidades públicas obligadas a proporcionar la información pública.

Todas las decisiones del Instituto vincularán a las entidades públicas, en los términos de las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 15. LA AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA. El Instituto, a través del Consejo General, tiene la facultad de establecer la estructura, forma y modalidades de su organización y funcionamiento interno, en los términos que establece esta ley, bajo el principio de disponibilidad presupuestal.

ARTÍCULO 16. EL SISTEMA DE COOPERACIÓN EN LA MATERIA. El Instituto mediante convenio que celebre con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública u otra entidad pública federal, estatal o municipal, podrá asumir las funciones o servicios que en la materia le sean transferidas o delegadas, según su capacidad administrativa y financiera.

Igualmente, el Instituto podrá transferir o delegar funciones a las entidades públicas sujetas a la

obligación de proporcionar la información pública, para el mejor ejercicio de la función en la materia.

La transferencia o la delegación de funciones o servicios deberán programarse de manera gradual, a efecto de que el Instituto o la entidad pública puedan asumir con responsabilidad la función o servicio de que se trate.

SECCIÓN TERCERA

LA AUTONOMÍA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

ARTÍCULO 17. EL PATRIMONIO. El patrimonio del Instituto estará constituido por:

- I. Los ingresos que perciba conforme a la partida que establezca su presupuesto anual de egresos, así como los que perciba por los servicios que preste en cumplimiento de su objeto o que le correspondan por cualquier otro título legal.
- II. Los bienes muebles e inmuebles y demás ingresos que los gobiernos federal, estatal y municipal le aporten para la realización de su objeto.
- III. Los subsidios y aportaciones permanentes, periódicas o eventuales, que reciba de los gobiernos federal, estatal y municipal y, en general, los que obtenga de instituciones públicas, privadas o de particulares.
- IV. Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor.
- V. Todos los demás bienes o ingresos que adquiera por cualquier otro medio legal.

ARTÍCULO 18. LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO. El Instituto administrará su patrimonio conforme a las bases siguientes:

- I. Los recursos que integran su patrimonio, serán ejercidos en forma directa por los órganos del Instituto; o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley y su reglamento.
- II. El Congreso del Estado revisará y fiscalizará la cuenta pública del Instituto, en los términos de las disposiciones aplicables.
- III. El ejercicio presupuestal del Instituto deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social.
- IV. El Instituto manejará su patrimonio prudentemente conforme a la ley. En todo caso, el Instituto requerirá el acuerdo del Consejo General, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario o para celebrar actos o convenios que comprometan al Instituto por un plazo mayor al período de su encargo, por lo que el Instituto deberá observar las disposiciones aplicables a los órganos del Gobierno de las entidades de la administración pública del Estado. El convenio siempre será por un tiempo determinado y con un objeto preciso.
- V. El Instituto podrá celebrar acuerdos con las dependencias de los poderes ejecutivo o legislativo que correspondan, para que coadyuven, total o parcialmente, en las funciones relacionadas con la administración, control y fiscalización de su patrimonio.
- VI. En todo lo relativo a la administración, control y fiscalización de su patrimonio, el Instituto deberá observar las disposiciones aplicables a los órganos del gobierno de las entidades de la administración pública del estado, según la materia de que se trate.

ARTÍCULO 19. LA AUTONOMÍA PRESUPUESTAL. El Instituto elaborará su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo del Estado, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Congreso del Estado, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto no podrá ser modificado por el Poder Ejecutivo del Estado.

El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.

ARTÍCULO 20. LA GARANTÍA PRESUPUESTAL. El Instituto contará con los recursos humanos, financieros y materiales que autorice el presupuesto de egresos correspondiente.

ARTÍCULO 21. LA GARANTÍA DEL BENEFICIO FISCAL. El Instituto gozará, respecto de su patrimonio, de las franquicias, exenciones y demás prerrogativas concedidas a los fondos y bienes del estado.

SECCIÓN CUARTA

LOS LÍMITES DE LA AUTONOMÍA DEL INSTITUTO

ARTÍCULO 22. LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN DE LA MATERIA. Todas las funciones y actividades del Instituto, se regirán por los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad.

ARTÍCULO 23. EL SISTEMA DE CONTROL. El Instituto se sujetará a los medios de control siguientes:

- I. El control de justicia constitucional local que ejerza el Poder Judicial del Estado, en los términos de las disposiciones aplicables.
- II. El control de revisión y fiscalización que ejerza el Congreso del Estado de Coahuila, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda.
- III. El control social de las personas físicas o morales, a través del ejercicio de la participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones públicas en la materia.

ARTÍCULO 24. EL INFORME ANUAL. El Instituto, a través de su Consejero Presidente, deberá rendir un informe por escrito ante el Congreso del Estado, sobre los trabajos realizados por el Instituto, a más tardar el quince de diciembre de cada año.

Este informe se ordenará publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

TÍTULO SEGUNDO

LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO

CAPÍTULO PRIMERO

LA ESTRUCTURA DEL INSTITUTO

ARTÍCULO 25. EL MODELO ESTRUCTURA DEL INSTITUTO. Para el ejercicio de sus funciones, el Instituto contará con órganos directivos, técnicos y de vigilancia, en los términos que establece

esta ley y la reglamentación que realice el Consejo General.

ARTÍCULO 26. LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS. Los órganos directivos del Instituto son:

- I. El Consejo General.
- II. La Presidencia del Consejo General.
- III. Las Comisiones.

ARTÍCULO 27. LOS ÓRGANOS TÉCNICOS. Los órganos técnicos del Instituto son:

- I. La Dirección General.
- II. La Secretaría Técnica.

ARTÍCULO 28. EL ÓRGANO DE VIGILANCIA. El órgano de vigilancia del Instituto es la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Disciplina.

ARTÍCULO 29. EL SERVICIO PROFESIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cada uno de sus órganos, el Instituto contará, para el desempeño de sus funciones, con el apoyo de funcionarios integrados en un cuerpo denominado Servicio Profesional de Acceso a la Información Pública.

El Servicio Profesional de Acceso a la Información, es la base del funcionamiento del Instituto.

CAPÍTULO SEGUNDO

LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL INSTITUTO

SECCIÓN PRIMERA

EL CONSEJO GENERAL

ARTÍCULO 30. EL CONSEJO GENERAL COMO AUTORIDAD MÁXIMA. El Consejo General, es el órgano superior de dirección del Instituto.

ARTÍCULO 31. EL OBJETO DEL CONSEJO GENERAL. El Consejo General del Instituto tiene por objeto:

- I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en la materia, e interpretar y aplicar las mismas.
- II. Garantizar que toda entidad sujeta a la ley de la materia cumpla con los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad.

ARTÍCULO 32. LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO GENERAL. El Instituto se integrará por tres consejeros propietarios y tres suplentes.

ARTÍCULO 33. LA DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS. La designación de los consejeros del Instituto, se realizará bajo el siguiente procedimiento:

- I. El Pleno del Congreso del Estado procederá a realizar una convocatoria pública para que todo interesado tenga el derecho a participar en el procedimiento de designación de consejeros, a partir de las reglas previstas en este artículo.

- II. Hecha la convocatoria del Congreso del Estado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila instrumentará el procedimiento de selección conforme a las bases siguientes:
 1. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, a través de una comisión integrada por tres consejeros electorales, señalará el lugar, el plazo para la presentación de las solicitudes, los contenidos temáticos del examen y demás requisitos que todo interesado tendrá que cubrir para presentar su solicitud.
 2. Se señalarán, a través de la comisión, los documentos idóneos para acreditar los requisitos de elegibilidad para ser consejero.
 3. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila elaborará, aplicará y calificará, a través de la comisión, un examen sobre los temas básicos de la materia. Para tal efecto, dicha comisión autorizará los contenidos temáticos del examen, el lugar, fecha y hora de su aplicación. Una vez calificados los exámenes, la comisión los enviará al Consejo de la Judicatura conforme la fracción siguiente.
 4. Hecho lo anterior, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, a través de la comisión, sistematizará cada una de las solicitudes, integrará los exámenes y enviará toda la documentación al Consejo de la Judicatura.
- III. El Consejo de la Judicatura dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de las solicitudes, procederá a lo siguiente:
 1. Dictaminar la procedencia de los requisitos de elegibilidad de cada uno de los interesados, debiendo fundar y motivar su calificación, en cada una de las solicitudes.
 2. Enviar el dictamen al Pleno del Congreso del Estado sobre cada solicitud, en donde se determinará la calificación legal de cada expediente con sus documentos y el examen correspondiente calificado por la comisión respectiva del órgano electoral.
- IV. Las determinaciones de la comisión del órgano electoral y del Consejo de la Judicatura conforme al procedimiento a que se refieren las fracciones anteriores, serán definitivas e inatacables.
- V. Entre la lista de los aspirantes integrados conforme al dictamen del Consejo de la Judicatura, cada una de las fracciones parlamentarias realizará su propuesta de consejeros a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, dentro de los tres días hábiles siguientes de haber recibido dicho dictamen del Consejo de la Judicatura.
- VI. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, se reunirá para elaborar un dictamen en donde propondrá tres consejeros propietarios y tres consejeros suplentes.
- VII. El Congreso del Estado, con base en el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, designará a los consejeros mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso del Estado.
- VIII. En caso de que no se obtenga la votación calificada, el Congreso del Estado solicitará de nueva cuenta a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que elabore una nueva propuesta de dictamen, en forma parcial o total, según se acuerde.

ARTÍCULO 34. LOS REQUISITOS PARA SER CONSEJEROS. Para ser designado consejero del Instituto, se deberán cumplir los requisitos siguientes:

- I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
- II. Contar por lo menos con veinticinco años al día de la designación.
- III. Contar con título profesional de licenciatura en general.
- IV. De preferencia tener conocimientos y experiencia en la materia, de preferencia con estudios de posgrado.
- V. No haber desempeñado un cargo de elección popular federal, estatal o municipal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación.
- VI. No haber desempeñado el cargo de Secretario de la Administración Pública Estatal, Procurador General de Justicia o Director General de una entidad paraestatal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación.
- VII. No haber sido dirigente de un comité directivo, ejecutivo o equivalente de un partido político a nivel nacional, estatal o municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación.
- VIII. No tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria en algún partido político, cuando menos cinco años antes de su designación.
- IX. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena.

ARTÍCULO 35. LA TOMA DE PROTESTA DE LOS CONSEJEROS. Los consejeros rendirán la protesta de ley ante el Congreso del Estado, o en sus recesos, ante la Diputación Permanente, y durarán en su encargo siete años a partir del día en que surta efectos su designación.

ARTÍCULO 36. LA GARANTÍA DE REMUNERACIÓN ADECUADA. Los consejeros en funciones, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su cargo, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

APARTADO PRIMERO

EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO GENERAL

ARTÍCULO 37. LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. El Consejo General celebrará sesiones públicas ordinarias por lo menos una vez al mes, sin perjuicio de celebrar, en cualquier tiempo, las sesiones extraordinarias que sean necesarias para la eficaz marcha del Instituto, previa convocatoria del Consejero Presidente o de al menos dos de los consejeros.

ARTÍCULO 38. EL DESARROLLO DE LAS SESIONES. Las sesiones del Consejo General se sujetarán a las reglas siguientes:

- I. Serán públicas.
- II. Serán válidas cuando se integren con la mitad más uno del total de los consejeros, siempre que esté presente su presidente o quien legalmente deba suplirlo.
- III. Podrán concurrir, con voz pero sin voto, el Director General y el Secretario Técnico.

- IV. De toda sesión, se levantará el acta respectiva a través del Secretario Técnico. Las actas deberán contener una síntesis del asunto a tratar y el punto acordado. Las actas se resguardarán en el archivo del Instituto, por conducto de la Secretaría Técnica.
- V. El Secretario Técnico al inicio de cada sesión, leerá el acta de la sesión anterior para su aprobación. La misma deberá ser autorizada con las firmas del consejero presidente o de quien legalmente deba suplirlo y del propio Secretario Técnico.
- VI. Se dará curso a los asuntos listados en el orden del día o de aquellos que requieran la intervención del Consejo General.
- VII. El Consejero Presidente o quien legalmente deba suplirlo, presidirá la sesión, dirigirá los debates, declarará cerrada la discusión cuando así lo estime y, finalmente, someterá a votación los asuntos correspondientes.
- VIII. Las votaciones del Consejo General se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el Consejero Presidente o quien legalmente deba suplirlo, tendrá voto de calidad.
- IX. El Consejero Presidente por sí o a través del Secretario Técnico, deberá ejecutar los acuerdos sin demora. El Consejo General podrá corregir, subsanar o modificar el acuerdo ejecutado, cuando advierta un error esencial en el acta que se somete a su aprobación.
- X. Se podrá invitar hasta tres0 expertos en la materia, profesores, investigadores o cualquier sector de la sociedad, para discutir en forma pública los temas de la agenda del Instituto, los cuales tendrán derecho a voz en la sesión.

ARTÍCULO 39. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LAS FACULTADES DEL CONSEJO GENERAL. Las atribuciones concedidas al Instituto en esta u otras leyes, residen originalmente en el Consejo General. Los demás órganos del Instituto creados por esta ley o su reglamento, podrán ejercer esas u otras facultades en los casos siguientes:

- I. Cuando esta ley u otras leyes les otorguen expresamente las atribuciones.
- II. Cuando por acuerdo del Consejo General se deleguen las atribuciones para el mejor funcionamiento del Instituto.

ARTÍCULO 40. LAS FACULTADES DEL CONSEJO GENERAL. El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes:

- I. En materia de administración y gobierno interno:
 - 1. Dictar las medidas de administración y gobierno interno que resulten necesarias para la debida organización y funcionamiento del Instituto.
 - 2. Establecer la estructura administrativa de los órganos del Instituto y su jerarquización.
 - 3. Establecer la integración, organización, funcionamiento y atribuciones de las Comisiones del Instituto que establezca esta ley o que cree el Consejo General, para el debido funcionamiento del Instituto.
 - 4. Designar a los servidores públicos a su cargo, salvo el personal de la presidencia.
 - 5. Elaborar el informe anual que rendirá ante el Pleno del Congreso del Estado.

6. Establecer un sistema interno de rendición de cuentas claras, transparentes y oportunas, así como garantizar el acceso a la información pública dentro del Instituto en los términos de la ley.
7. Requerir, recibir, analizar y sistematizar los informes que deberán enviarle las entidades públicas sobre la materia.
8. Fijar el orden de prelación de los consejeros suplentes para efectos de las ausencias definitivas o temporales de los propietarios.
9. Dirimir cualquier tipo de conflicto competencial entre los órganos del Instituto, resolviendo en definitiva.
10. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos del Instituto, a efecto de que el Consejero Presidente lo envíe al Ejecutivo del Estado para los efectos correspondientes.
11. Ordenar publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado los reglamentos, acuerdos y demás actos que por su importancia requieran difusión.
12. Las demás que resulten necesarias para la administración y gobierno interno del Instituto.

II. En materia normativa:

1. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia, así como dictar las normas y previsiones destinadas a hacer efectivas tales disposiciones.
2. Aprobar, a propuesta del presidente o de una comisión, los reglamentos siguientes:
 - a) El Interior del Instituto.
 - b) El de Acceso a la Información Pública.
 - c) El de la Protección del Derecho a la Intimidad de las Personas.
 - d) El de Administración, Conservación y Preservación de la Documentación Pública.
 - e) El de Medios de Impugnación en Materia de Acceso a la Información Pública.
 - f) El del Servicio Profesional de Acceso a la Información Pública.
3. Expedir los demás reglamentos, normas generales o particulares, circulares o lineamientos generales en la materia, que serán de observancia obligatoria en el régimen interior del estado, para todas las entidades públicas y particulares.
4. Dar trámite y resolver las acciones y recursos que, en la materia, interpongan las personas, previa instrucción del consejero presidente, o en su defecto, de una comisión del Instituto.
5. Establecer las disposiciones necesarias para que las entidades sujetas a proporcionar información pública, realicen la clasificación, desclasificación, administración, archivo y resguardo de la información pública, reservada y confidencial que corresponda.
6. Vigilar y requerir el cumplimiento de la garantía de la información pública mínima, conforme a la ley de la materia.
7. Establecer las garantías necesarias para el acceso a la información pública, la protección

del derecho a la intimidad de las personas, los archivos públicos y demás atribuciones en la materia.

8. La definición de los grupos vulnerables para la protección prevalente del derecho a la intimidad.
9. Aprobar las iniciativas de leyes o decretos en la materia, para después presentarlas al Congreso por conducto de su Consejero Presidente.
10. Promover controversias y acciones constitucionales locales en la materia.

III. En materia de relaciones intergubernamentales:

1. Celebrar convenios de apoyo y colaboración con autoridades federales, estatales o municipales.
2. Cooperar con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública en el cumplimiento de las funciones de ambas entidades.
3. Cooperar con los sujetos obligados en el cumplimiento de la ley, de manera directa e inmediata o mediante la celebración de programas y acuerdos.
4. Promover la rendición de cuentas de los poderes públicos entre sí, y la transparencia y rendición de cuentas hacia los ciudadanos y la sociedad.
5. Promover la colaboración interinstitucional en la materia bajo los principios de fidelidad estatal y municipal.

IV. En materia de acceso a la información pública:

1. Dictar las providencias y medidas necesarias para salvaguardar el derecho de acceso a la información pública.
2. Promover la regulación e instrumentación del principio de publicidad de los actos y decisiones, así como el libre acceso a las reuniones de los poderes públicos estatales, municipales y organismos públicos autónomos.
3. Cumplir y hacer cumplir los principios en la materia.
4. Emitir las resoluciones, recomendaciones y políticas que correspondan para que las entidades públicas cumplan con el derecho ciudadano a acceder a la información pública.
5. Elaborar los formatos utilizados para el ejercicio del derecho de acceso a la información.
6. Sancionar a los servidores públicos por violación al derecho de acceso a la información pública, en los términos de la ley de la materia.
7. Ejercer las demás facultades previstas en la ley de la materia, para salvaguardar el acceso a la información pública.

V. En materia de protección del derecho a la intimidad de las personas:

1. Establecer las normas y políticas para la administración, seguridad y resguardo de los datos personales en protección de las entidades públicas.
2. Cumplir y hacer cumplir los principios y normas en la materia.

3. Elaborar los formatos utilizados para el ejercicio de la acción para proteger el derecho a la intimidad de las personas y demás acciones legales que correspondan en la materia.
4. Emitir las reglas, criterios o lineamientos necesarios para el adecuado tratamiento de los datos personales.
5. Ejercer las demás facultades previstas en la ley de la materia, para la protección del derecho a la intimidad de las personas.

VI. En materia de administración, conservación y preservación de la documentación pública:

1. Dictar las providencias y medidas necesarias para salvaguardar la documentación pública.
2. Vigilar que las entidades públicas cumplan con las normas, lineamientos y criterios en la materia.
3. Establecer una red de coordinación interinstitucional a la que se integrarán todos los archivos que formen parte de las entidades públicas.

VII. En materia de cultura de la transparencia informativa:

1. Promover de manera permanente la cultura de la transparencia informativa.
2. Promover la capacitación, actualización y habilitación de los servidores públicos responsables de la protección del derecho a la intimidad de las personas y de la documentación pública.
3. Elaborar guías que expliquen de manera sencilla, los procedimientos y trámites que de acuerdo con la presente ley, tengan que realizarse ante las entidades y el Instituto.
4. Promover que en los programas y planes de estudio, libros y materiales que se utilicen en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, se incluyan contenidos y referencias a los derechos tutelados en la materia.
5. Elaborar y publicar estudios, investigaciones y, en general, cualquier tipo de edición, que difunda y socialice el conocimiento de la materia
6. Orientar y auxiliar a las personas para ejercer los derechos en la materia.
7. Las demás que resulten necesarias para fomentar la cultura de la transparencia informativa.

VIII. En materia de participación comunitaria y ciudadana:

1. Diseñar e instrumentar la política de participación ciudadana y comunitaria en la materia.
2. Establecer la organización y el funcionamiento de un Consejo Ciudadano como órgano de consulta, apoyo y colaboración en la materia, a fin de diseñar un sistema de control y evaluación ciudadano del Instituto.
3. Fomentar, promover e incentivar la participación ciudadana y comunitaria en estos rubros.
4. Las demás necesarias para garantizar la participación ciudadana y comunitaria en la materia.

IX. En materia de estadística, encuestas y sondeos.

1. Establecer las normas para la realización de las estadísticas, sondeos y encuestas que se requieran, y que garanticen la imparcialidad, objetividad, transparencia, confiabilidad, periodicidad, oportunidad e independencia de las mismas.
2. Diseñar, instrumentar y evaluar el Sistema de Estadísticas, Sondeos y Encuestas.

X. Las demás que le confiera esta ley u otras disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 41. LAS FACULTADES DE LOS CONSEJEROS. Los consejeros tendrán las siguientes atribuciones:

- I. Velar por la efectividad del derecho a la información pública, la protección del derecho a la intimidad de las personas y la documentación pública.
- II. Promover, supervisar y participar en los programas de transparencia informativa.
- III. Orientar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos en la materia.
- IV. Desempeñar las tareas que el propio Consejo General les encomiende.
- V. Formar parte de las comisiones y subcomisiones que acuerde el Consejo General.
- VI. Las demás que esta ley u otras disposiciones aplicables les confieran.

APARTADO SEGUNDO

LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LOS CONSEJEROS

ARTÍCULO 42. LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LOS CONSEJEROS. Los consejeros desempeñan una función pública. En todo caso, la función de los consejeros se sujetará a los principios de autonomía, independencia, legalidad, excelencia, profesionalismo, imparcialidad, objetividad, probidad y honestidad.

ARTÍCULO 43. LA INCOMPATIBILIDAD DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Durante el desempeño de su función, los consejeros no podrán ocupar ningún otro empleo, cargo o comisión oficial, excepción hecha de los cargos oficiales en los que actúen en asociaciones, instituciones o universidades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia.

Se exceptúa también de la incompatibilidad, la función de maestro, profesor o investigador académico.

ARTÍCULO 44. LA RESERVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Los consejeros no podrán utilizar en beneficio propio o de terceros, la información reservada o confidencial de que dispongan en razón de su cargo, ni tampoco podrán divulgarla sin autorización del Consejo General.

ARTÍCULO 45. LA RESPONSABILIDAD DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Los consejeros estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, en los términos de la Constitución Política del Estado, la ley reglamentaria y esta ley.

APARTADO TERCERO

EL RÉGIMEN DE AUSENCIAS DEL CONSEJO GENERAL

ARTÍCULO 46. LAS AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS. En caso de ausencia temporal o definitiva de algún consejero, el Consejero Presidente llamará al consejero suplente que corresponda, según el orden de prelación, para que desempeñe la función en forma temporal o definitiva, según se trate.

Por ausencia temporal se entenderá toda aquella que no exceda de quince días hábiles o por separación provisional de su cargo, previo permiso o licencia del Consejo General. Por ausencia definitiva se entenderá toda aquella que impida definitivamente que el consejero propietario pueda seguir ejerciendo su función, por renuncia, remoción definitiva del cargo, ausencia definitiva o cualquier otra causa grave justificada.

ARTÍCULO 47. LAS AUSENCIAS DEL PRESIDENTE. Las ausencias temporales del Consejero Presidente las suplirá el consejero que designe el propio presidente.

ARTÍCULO 48. LA AUSENCIA DEFINITIVA. Se considerará ausencia definitiva, la inasistencia consecutiva y, sin causa justificada, de algún consejero propietario a tres sesiones agendadas y previamente notificadas.

SECCIÓN SEGUNDA

LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL

(REFORMADO, P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2006)

ARTÍCULO 49. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO. Los consejeros nombrarán por voto secreto y por mayoría de votos al Presidente del Consejo General, que lo será también del Instituto por un período de dos años, pudiendo ser ratificado por un período igual o en su caso, durará el tiempo que le reste de su período como consejero, en caso de ser menor de dos años.

En caso de ausencia definitiva del Presidente, los consejeros nombrarán de nueva cuenta y de entre ellos mismos, a quien deba sustituirlo. Para la duración del encargo, se estará a lo previsto en el párrafo anterior.

La designación del Consejero Presidente se comunicará de inmediato para su conocimiento a los Poderes del Estado y a los organismos públicos autónomos.

ARTÍCULO 50. LAS FACULTADES DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO. La Presidencia del Consejo General tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Representar legalmente al Instituto ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal.
- II. Velar por la unidad de las actividades de los órganos del Instituto.
- III. Establecer los vínculos necesarios entre el Instituto y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y las demás autoridades federales, estatales y municipales, para lograr su apoyo, colaboración y auxilio, en sus respectivos ámbitos de competencia.
- IV. Convocar y conducir las sesiones del Consejo General.
- V. Instruir los asuntos, procedimientos y recursos de competencia del Consejo General hasta ponerlos en estado de resolución.
- VI. Dictar las medidas de salvaguarda para proteger el derecho a la intimidad de las personas, en caso de extrema urgencia.

- VII. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el propio Consejo General.
- VIII. Proponer al Consejo General, el nombramiento del Director General y del Secretario Técnico del Instituto.
- IX. Proponer anualmente al Consejo General, el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto para su aprobación.
- X. Remitir al titular del Poder Ejecutivo, el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto aprobado por el Consejo General, en los términos de la ley de la materia.
- XI. Ejercer las partidas presupuestales aprobadas.
- XII. Ejercer, previo acuerdo del Consejo General, actos de dominio.
- XIII. Rendir los informes ante las autoridades competentes, en representación del Consejo General o del Instituto.
- XIV. Otorgar poderes generales y especiales para actos de administración y pleitos y cobranzas, de conformidad con la ley.
- XV. Emitir los acuerdos necesarios para el funcionamiento interno de la presidencia.
- XVI. Nombrar y remover libremente al personal de confianza y de base adscrito a la propia Presidencia, conforme a las disposiciones aplicables.
- XVII. Las demás que le confiera esta ley u otras disposiciones aplicables.

SECCIÓN TERCERA

LAS COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL

ARTÍCULO 51. LAS COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL. El objeto de las comisiones radica en la función dictaminadora de los asuntos de su competencia, a efecto de someter su proyecto de dictamen al Consejo General, para que éste decida lo que proceda.

ARTÍCULO 52. LAS FACULTADES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL. Las comisiones tendrán la integración, organización, competencia y las atribuciones que se establezcan en el reglamento u otras disposiciones generales aplicables.

En todo caso, las comisiones se integrarán por lo menos con dos consejeros, el Director General o el Secretario Técnico, según lo acuerde el Consejo General.

El Consejo General podrá delegar funciones a las comisiones.

ARTÍCULO 53. EL PERSONAL DE LAS COMISIONES. Las comisiones del Consejo General contarán con el auxilio del personal necesario para cumplir su función, previo acuerdo del Consejo General y con arreglo a la disponibilidad presupuestal del Instituto.

En todo caso, el personal que integre cada una de las comisiones deberá ser profesional y especializado en la materia u objeto de la comisión.

SECCIÓN CUARTA

LA DIRECCIÓN GENERAL

ARTÍCULO 54. EL DIRECTOR GENERAL. El titular de la Dirección General será nombrado y removido libremente por el Consejo General del Instituto, a propuesta del consejero presidente.

ARTÍCULO 55. LAS FACULTADES DEL DIRECTOR GENERAL. La Dirección General tendrá las facultades siguientes:

- I. Asistir y participar con voz, pero sin voto en las sesiones del Consejo General.
- II. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo General.
- III. Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo General, informes periódicos sobre los asuntos de su competencia.
- IV. Ejecutar e implementar las providencias necesarias para la atención de aquellos asuntos del Instituto que, por su naturaleza o urgencia, así lo requieran. Cuando se trate de asuntos que correspondan a la competencia del Consejo General, lo hará del conocimiento inmediato del Consejero Presidente para que lo instruya al respecto.
- V. Proponer al Consejo General, previo acuerdo con el Consejero Presidente, la estructura de las comisiones y demás órganos administrativos del Instituto, conforme a las necesidades del servicio y los recursos presupuestales autorizados.
- VI. Coordinar el funcionamiento técnico de los órganos del Instituto y supervisar el adecuado desarrollo de sus actividades.
- VII. Formular y presentar, previo acuerdo con el Consejero Presidente, a la aprobación del Consejo General, los proyectos de reglamentos y demás disposiciones generales o particulares.
- VIII. Llevar a cabo los programas de reclutamiento, selección, formación y desarrollo del personal profesional del Instituto.
- IX. Aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto.
- X. Fijar, previo acuerdo con el consejero presidente, las directrices que le permitan a cada órgano del Instituto, el cumplimiento de las funciones y atribuciones que les están conferidas de conformidad con lo establecido por el reglamento interior del Instituto.
- XI. Proveer a los órganos del Instituto, los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a la capacidad presupuestal del Instituto.
- XII. Elaborar, de conformidad con las disposiciones aplicables, el proyecto del presupuesto anual de egresos del Instituto, a fin de que el Consejero Presidente, una vez que lo haya autorizado el Consejo General, lo presente al titular del Ejecutivo del Estado, para que éste lo someta a la consideración y, en su caso, aprobación del Congreso Estatal.
- XIII. Las demás que le confiera esta ley u otras disposiciones aplicables.

SECCIÓN QUINTA

LA SECRETARÍA TÉCNICA

ARTÍCULO 56. LA SECRETARÍA TÉCNICA. El titular de la Secretaría Técnica será nombrado y removido libremente por el Consejo General, a propuesta del Consejero Presidente.

ARTÍCULO 57. LAS FACULTADES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA. La Secretaría Técnica tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Asistir y participar con voz, pero sin voto en las sesiones celebradas por el Consejo General.
- II. Ejecutar, cumplir y verificar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General informando de ello al Consejero Presidente.
- III. Elaborar el orden del día de las sesiones del Consejo General y declarar la existencia del quórum legal necesario para sesionar.
- IV. Dar fe de lo actuado en las sesiones y levantar el acta correspondiente.
- V. Dar cuenta de la correspondencia recibida y despachada por el Instituto.
- VI. Firmar junto con el Consejero Presidente, todos los acuerdos y resoluciones que emita el Consejo General.
- VII. Notificar a los interesados, los acuerdos y resoluciones del Consejo General.
- VIII. Instrumentar y dar fe de los procedimientos que se instruyan por el Consejo General.
- IX. Informar al Consejo General sobre el cumplimiento de los acuerdos que haya dictado.
- X. Llevar el archivo del Instituto.
- XI. Expedir, previa autorización del consejero presidente, copias certificadas de las constancias que obren en los archivos del Instituto.
- XII. Proveer lo necesario a fin de que se hagan oportunamente las publicaciones que ordena la ley correspondiente u otras disposiciones aplicables, así como las que disponga el Consejo General.
- XIII. Auxiliar al consejero presidente, a las comisiones y al Director General, en el despacho de los asuntos a su cargo.
- XIV. Elaborar los proyectos de dictámenes que la ley aplicable, el Consejo General o las comisiones le encomienden.
- XV. Recibir y tramitar en los términos de las disposiciones aplicables, los medios de impugnación que se interpongan en contra de los actos o resoluciones que emita el Instituto.
- XVI. Tramitar y dar causa, a las promociones, quejas o recursos presentados ante el Instituto en los términos establecidos en la ley de la materia.
- XVII. Las demás que le confiera esta ley u otras disposiciones aplicables.

SECCIÓN SEXTA

LA COMISIÓN DE VIGILANCIA, EVALUACIÓN Y DISCIPLINA

ARTÍCULO 58. LA COMISIÓN DE VIGILANCIA, EVALUACIÓN Y DISCIPLINA. La Comisión de

Vigilancia, Evaluación y Disciplina es el órgano de control interno del Instituto encargado de inspeccionar, supervisar y sancionar la función de todo el personal del Instituto.

Se integrará por dos consejeros y por el Director General. De entre ellos, elegirán a un presidente, que coordinará los trabajos de la comisión.

ARTÍCULO 59. LAS FACULTADES DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA, EVALUACIÓN Y DISCIPLINA. La Comisión de Vigilancia, Evaluación y Disciplina tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Dictar las medidas necesarias para supervisar y corregir la función en la materia.
- II. Ordenar y practicar visitas ordinarias y extraordinarias a los órganos del Instituto, para verificar el debido cumplimiento de sus funciones.
- III. Proponer al Consejo General, los criterios de evaluación de la función en la materia para su discusión y, en su caso, aprobación.
- IV. Aplicar los criterios de evaluación de la función en la materia, al personal del Instituto, para medir su desempeño conforme a los principios previstos en esta ley.
- V. Conocer, tramitar y, en su caso, resolver los procedimientos disciplinarios en los términos de las disposiciones aplicables.

TÍTULO TERCERO

LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 60. LA RESPONSABILIDAD OFICIAL. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos, a los consejeros del Consejo General del Instituto; al Director General, el Secretario Técnico y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza dentro del Instituto.

ARTÍCULO 61. LOS TIPOS DE RESPONSABILIDAD OFICIAL. Los servidores públicos en ejercicio de la función de la materia, podrán ser sancionados cuando incurran en responsabilidad, de conformidad con las prevenciones siguientes:

- I. Se impondrá a los consejeros, mediante juicio político, las sanciones de destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza, en el servicio público estatal o municipal, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen desempeño.
- II. La comisión de delitos será sancionada con arreglo a la Constitución y a la legislación penal.
- III. Se aplicarán sanciones administrativas por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que deban observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas serán autónomos en su desarrollo, sin que puedan imponer dos veces, por una sola conducta, sanciones de la misma

naturaleza.

ARTÍCULO 62. DENUNCIA. Toda persona física o moral, por sí o por conducto de sus representantes legales, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrán formular denuncia por escrito ante quien corresponda, respecto de las conductas a que se refiere el artículo anterior.

CAPÍTULO SEGUNDO

EL JUICIO POLÍTICO

ARTÍCULO 63. EL JUICIO POLÍTICO. Son sujetos de juicio político, los consejeros del Consejo General del Instituto que se encuentren en funciones de manera permanente.

ARTÍCULO 64. LA COMPETENCIA PARA INSTRUIR EL JUICIO POLÍTICO. Corresponde al Congreso del Estado, instruir el procedimiento relativo al juicio político, por las causas y con las formalidades establecidas por la Constitución y las leyes de la materia, así como imponer, en su caso, las sanciones aplicables de acuerdo con la ley.

ARTÍCULO 65. LA TEMPORALIDAD DEL JUICIO POLÍTICO. El procedimiento de juicio político, sólo podrá iniciarse durante el período en que el consejero desempeñe su cargo y dentro del año siguiente al que se separe por cualquier causa, del ejercicio de sus funciones.

Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento.

CAPÍTULO TERCERO

LA DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PENAL

ARTÍCULO 66. LA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA. Para proceder penalmente en contra de los consejeros propietarios del Consejo General del Instituto, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso del Estado deberá declarar, mediante resolución de las dos terceras partes del total de sus miembros, si ha lugar o no, a proceder contra el inculpado, sujetándose a la garantía de audiencia.

ARTÍCULO 67. EL JUICIO PENAL. Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el inculpado quedará a disposición de las autoridades competentes.

CAPÍTULO CUARTO

LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

APARTADO PRIMERO

LOS SUJETOS

ARTÍCULO 68. LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. Son sujetos de responsabilidad administrativa, todos los miembros del Instituto, cualquiera que sea su jerarquía.

Los consejeros serán sujetos de responsabilidad administrativa en los términos que establece esta

ley; pero en todo caso, la sanción de destitución o inhabilitación de su cargo, se hará sólo mediante juicio político que se tramite ante el Congreso del Estado en los términos de las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 69. EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN. La acción disciplinaria prescribe en tres años, contados desde el día siguiente a aquél en que se hubiere cometido la falta, o a partir del momento en que hubiese cesado, si fuere de carácter continuado.

La iniciación del procedimiento interrumpe la prescripción.

APARTADO SEGUNDO

LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 70. FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CONSEJEROS. Se consideran como faltas de los consejeros en su actuación, relacionadas con el Consejo General, las siguientes:

- I. Dejar de asistir a las sesiones sin causa justificada.
- II. Desintegrar sin motivo justificado, el quórum del Consejo General, una vez iniciados los trabajos en cada sesión
- III. Violar las normas que regulan su actuación.

ARTÍCULO 71. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS CONSEJEROS. Para determinar la responsabilidad administrativa de los consejeros propietarios, del Director General, del Secretario Técnico y de todo funcionario del Instituto de confianza o de base, se aplicará las faltas administrativas y el procedimiento respectivo que establece la ley de la materia para todo funcionario o servidor público del estado y de los municipios.

ARTÍCULO 72. LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA. La jurisdicción disciplinaria se ejercerá:

- I. Por el Consejo General, cuando se trate de quejas en contra de los consejeros.
- II. Por la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Disciplina cuando se trate de quejas en contra del Director General, el Secretario Técnico y demás personal del Instituto.

TÍTULO CUARTO}

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 73. LAS RELACIONES LABORALES. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, así como, en lo conducente, por la de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado y el Reglamento del Servicio Profesional de Acceso a la Información Pública.

Serán considerados personal de confianza dentro del Instituto: el Director General, el Secretario Técnico y, en general, quienes realicen funciones de dirección, de vigilancia, de fiscalización y de administración.

ARTÍCULO 74. EL LANGUAGE DE EQUIDAD DE GÉNERO. Si por exigencias de construcción gramatical, enumeración, orden u otra circunstancia, el texto legal contenido en esta ley usa el

género masculino, el mismo deberá ser interpretado en sentido igualitario para hombres y mujeres, de modo que éstas y aquéllos puedan adquirir toda clase de derechos y contraer igualmente toda clase de deberes jurídicos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente ley entrará en vigor el día 1° de diciembre de 2004, una vez publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Durante el plazo de vacancia, los poderes del estado promoverán la difusión de esta ley.

SEGUNDO. El Congreso del Estado de Coahuila, a partir de que inicie el Primer Período Ordinario de Sesiones del Congreso del Estado del año 2004, deberá emitir la convocatoria para la selección de los consejeros del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, a fin de ser designados por el Congreso del Estado en el Segundo Período Ordinario de Sesiones, en los términos a que se refiere el artículo 33 de esta ley.

Para la integración inicial del Instituto y por única vez, los comisionados serán designados en forma escalonada: por cinco, seis y siete años, respectivamente, con el objeto de que al momento de la renovación de los mismos, siempre sea posible contar con una adecuada combinación de experiencia, conocimiento y prestigio profesional.

El Congreso del Estado fijara la duración de cada consejero, propietario o suplente, conforme al dictamen que presente la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Una vez designados los consejeros, en la primera sesión de inicio del Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, se tomarán los acuerdos necesarios para el debido funcionamiento del Instituto. El acta de inicio deberá ser enviada para su publicación al Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

TERCERO. A partir de su nombramiento, los consejeros del Instituto Coahuilense de Acceso de la Información Pública deberán instrumentar las acciones concernientes a que la presente ley sea conocida y difundida entre los diversos sectores sociales, así como a concientizar a los ciudadanos y servidores públicos de la importancia que revisten los derechos de acceso a la información.

Para tal efecto, podrán atraer el concurso de instituciones de educación superior, así como de organismos nacionales e internacionales especializados en el tema.

CUARTO. El Instituto, de acuerdo con esta ley, deberá emitir los reglamentos a que se refiere la fracción VI del artículo 40 de esta ley, dentro de un año contado a partir de la fecha en que se celebre la sesión de inicio de su funcionamiento.

QUINTO. Los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto Estatal de Documentación de Coahuila, se transferirán y pasarán a formar parte del patrimonio del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Se deberán respetar los derechos laborales de los trabajadores en los términos de las disposiciones aplicables.

Para tal efecto, la Secretaría de Gobierno deberá instrumentar las acciones necesarias que correspondan.

SEXTO. Para el ejercicio fiscal correspondiente y por única vez, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas, lleve a cabo las transferencias de dotación de partidas presupuestales que resulten necesarias con cargo al Presupuesto de Egresos, siempre que existieren recursos financieros para ello, a fin de que el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, se encuentre en posibilidad de iniciar sus funciones.

En caso contrario, el Ejecutivo del Estado deberá prever en el proyecto que elabore del presupuesto de egresos del gobierno del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente, las previsiones presupuestales a ejercer por el Instituto para el ejercicio anual correspondiente.

SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a esta ley.

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil tres.

DIPUTADO PRESIDENTE.

FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL.

DIPUTADA SECRETARIA

DIPUTADO SECRETARIO.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA.

ESTEBAN MARTÍNEZ DÍAZ.

IMPRIMASE, COMUNIQUESE Y OBSERVERSE
Saltillo, Coahuila, 29 de Octubre de 2003.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO

LIC. ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

LIC. JOSE JESÚS RAUL SIFUENTES GUERRERO

C.P. MARIA INES GARZA ORTA

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

EL SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. JAVIER GUERRERO GARCIA

N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.

P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2006.

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto.